

2 el desorden global

México

Ayotzinapa, acelerador de la crisis estatal

Arturo Anguiano

México parece vivir entre el terror y el horror disfrazados siempre por la mentira, el ocultamiento y los montajes militares, policíacos, de las agencias estatales que deberían ser las encargadas de la seguridad, la investigación y la procuración de justicia. De la matanza del 30 de junio de este año en Tlatlaya, estado de México, de 22 presuntos delincuentes por parte del Ejército, presentada falsamente como enfrentamiento a la persecución, asesinato de 6 personas y desaparición forzosa de 43 estudiantes normalistas por parte de policías del municipio de Iguala, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre, hay de entrada la misma lógica: abuso de poder, arbitrariedad, desprecio por la vida y la convicción de que se puede hacer lo que sea cobijado en una impunidad que está en la piel del régimen mexicano. Los medios masivos de comunicación de paga, vinculados en lo fundamental al poder y al dinero, con ese arrastre cuasi totalitario que los caracteriza, invariablemente avalan las *performances* oficiales y potencian sus alcances dirigidos a engañar y apaciguar a una población apática y melancólica. Hasta que por la fuerza de los hechos estos se filtran, fracturan el inmenso aparato de coacción moral que son los medios (Octavio Paz) y las verdades fabricadas saltan en añicos. Y entonces puede suceder lo impredecible, lo inesperado, la siempre temida, arriba, reacción incontrolada de los ciudadanos que no somos, de los excluidos de un orden social oligárquico.

La gota que rebasó el vaso, hartazgo, estallido de rabia, despertar de la pesadilla, miedo..., son muchas las expresiones que se han utilizado para explicar las reacciones de protesta y condena, prácticamente generalizadas en el país, por la agresión criminal contra miembros de una comunidad proscrita y criminalizada desde siempre por los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y nacional): los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos

“La larga noche de terror se saldó también con dos estudiantes asesinados, otro con muerte cerebral con un tiro en la cabeza, uno más que aparecerá más tarde tirado en la calle torturado y con la cara desollada, 25 heridos, y más de 50 normalistas desaparecidos”

de Ayotzinapa, hijos de campesinos, en general alumnos con bajos recursos, pobres, con una prolongada tradición de lucha y vinculados a una de las más persistentes organizaciones estudiantiles, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). En efecto, algo se quebró esa terrible noche cuyas repercusiones inesperadas han puesto al descubierto la profunda crisis del conjunto de las instituciones estatales y la corrupción de la clase política, amalgamada no solamente con la oligarquía financiera a la que se debe, sino con el crimen organizado, lo que revela el proceso de descomposición y degradación en que ha desembocado la transición política vuelta inacabable.

Los hechos

Alrededor de 80 estudiantes normalistas de recién ingreso a la Escuela Normal de Ayotzinapa realizaban el viernes 26 de septiembre una actividad de recolección de fondos solidarios a fin de trasladarse a la ciudad de México el 2 de octubre y asistir a la manifestación conmemorativa de la masacre de Tlatelolco. Como ha sido habitual en México desde hace décadas, los estudiantes salieron de Chilpancingo en dos autobuses tomados y al llegar a Iguala a las 21 horas para proseguir su tarea de “boteo” ocuparon otro autobús en la terminal de autobuses luego de negociar con el chofer. Al salir de ahí fueron emboscados por varias patrullas de policías municipales, que sin ninguna advertencia balacearon los camiones con armas de alto poder, ante lo que los estudiantes trataron de escapar, siendo perseguidos por los policías. Bloqueados luego por una patrulla, los estudiantes descendieron del vehículo tratando de desalojar el camino, y fueron de nuevo balaceados. Los policías meten en sus vehículos oficiales a varios jóvenes que logran atrapar y al parecer a algunos de ellos los concentran en el patio de la sede de la Policía Preventiva Municipal alrededor de las 23 horas. Más tarde, el 22 de octubre, el procurador Murillo Karam declararía: “El grupo de normalistas es ingresado a la central de policía de Iguala y tiempo después son sustraídos de esta dependencia por policías del municipio de Cocula, cuyo subjefe, César Nava, está a las órdenes de Guerreros Unidos”, uno de los cárteles que operan en el estado. De ahí los llevan a un lugar desconocido, y al parecer los entregan a sicarios del mencionado cártel.

La persecución de los normalistas y el escándalo de la balacera atrae la atención de representantes de algunos medios de comunicación, ante quienes se improvisa una rueda de prensa para informar de lo acontecido, pero de

nuevo son atacados, ahora también por personas embozadas, aparentemente civiles. Otro autobús que trasladaba a un equipo juvenil de fútbol es igualmente agredido, se desbarranca, con el saldo de la muerte del chofer, de un joven de 14 años y una señora que pasaba en un taxi, cuyo conductor fue igualmente herido. La larga noche de terror (tres horas duró el ataque) se saldó también con dos estudiantes asesinados (Daniel Solís Gallardo y Yosinavi Guerrero); otro con muerte cerebral con un tiro en la cabeza (Aldo Gutiérrez); uno más que aparecerá más tarde tirado en la calle torturado y con la cara desollada (Julio César Mondragón); 25 heridos, entre los que se encontraba un estudiante que, sin ser atendido, fue sacado de una clínica privada por el Ejército junto con sus compañeros; y más de 50 normalistas desaparecidos, cifra que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan precisará luego, quedando en 43, por quienes interpuso una denuncia por desaparición de personas ante la Agencia Especializada del Ministerio Público en Búsqueda de Personas no localizadas de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero.

Los hechos, motivaciones posibles y los actores responsables de tales sucesos se irán conociendo poco a poco. La verdad oficial va a coincidir poco con la versión de los estudiantes agredidos, victimizados y al inicio incluso criminalizados por las distintas autoridades estatales. Lo primero que se dijo fue que acaecieron por una suerte de intervención preventiva ordenada por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a fin de impedir que los estudiantes pudieran interrumpir un Informe-fiesta oficial (con todo y baile) de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, presidenta de la agencia de atención a la infancia (DIF), quien así lanzaba su campaña para sucederlo en el cargo, al que aspiraba competir en 2015 bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual ambos pertenecen. Aunque el presidente municipal Abarca mintió al día siguiente, afirmando que no se había enterado de nada que hubiera sucedido esa noche, pues se la pasó bailando, que se enteró por la prensa, si bien aprovechó para acusar a los estudiantes normalistas de haber sido “contratados para hacer desmadres”. Sin embargo, no hay datos de que los estudiantes que andaban en su actividad de recolección de fondos tuvieran el propósito de interrumpir ningún evento, del cual no tenían ni idea.

El sábado 27 de septiembre el gobierno del estado, encabezado por el gobernador perredista/¹ (expriista/²) Ángel Aguirre Rivero no tuvo más remedio que intervenir ante lo que el procurador del estado, Iñaki Blanco Cabrera, llamó “excesos policiales”, deteniendo a 22 policías involucrados, que fueron consignados por homicidio calificado. Luego que se comprobó que habían disparado sus armas. Se dispararon, según dijo, 30 armas, se recogieron 137

1/ Miembro del PRD (N. del E.).

2/ Miembro del PRI (Partido Revolucionario Institucional), partido mexicano que tuvo el poder presidencial desde 1929 hasta el año 2000, y de nuevo desde el 2012 hasta hoy (N. del E.).

casquillos y se comprobó que las armas de los policías fueron utilizadas igualmente en el ataque a los futbolistas, cuando había sido atribuido a civiles armados. El secretario de seguridad pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, rindió declaración sin que fuera detenido. Días y semanas pasaron con una sucesión de hechos, encubrimientos y descubrimientos que fueron armando una trama complicada no solo de crisis humanitaria, sino de crisis política, de todos los actores oficiales, involucrados o no directamente en los sucesos de la noche del horror, pero en el fondo todos con responsabilidad por omisión, comisión o negligencias. Contradicciones, incompetencias, historias ocultas, comportamientos erráticos de autoridades gubernamentales, del Ejército y de distintos actores políticos que —en medio de sospechas y complicidades— se verán cada vez más acorralados por una sociedad que irrumpirá con energía, rabia, decisión y escepticismo insospechados e inesperados, realmente disruptivos.

Lo primero que llamó la atención fue la pasividad del Ejército, que cuenta con el 27.º Batallón de Infantería y fuerzas especiales en Iguala, el cual pareció ausente en hechos delictivos ruidosos, cuyo jefe asistió en primera fila al evento oficial del Municipio y luego hasta el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, explicó, ante la Comisión que la Cámara de Diputados creó para investigar el caso de Iguala, que habían sido engañados por el secretario de seguridad pública municipal, que les dijo que no sucedía nada. Lo cierto es que la única aparición esa noche fue contra los propios estudiantes en el hospital mencionado. La mencionada Comisión especial de diputados averiguó que las policías federal y estatal vigilaron ese día a los normalistas desde que salieron de Chilpancingo rumbo a Iguala, realizando un trabajo de monitoreo, y que cuando escucharon balazos la policía estatal decide no intervenir por falta de elementos. Resulta evidente la responsabilidad del Ejército y de la fuerza pública federal y estatal al no intervenir ante ataques criminales en contra de la población civil, en este caso sobre todo de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, perseguidos por policías municipales y sicarios confundidos, asesinados y víctimas de desaparición forzada.

El gobernador Aguirre permitió que Abarca pidiera licencia a su cargo en una reunión formal del cabildo y que huyera junto con su esposa, y lo mismo el interrogado y liberado secretario de seguridad municipal, a pesar de los antecedentes de denuncias que los involucraban con el narcotráfico y acusaban al primero de asesinato de activistas sociales, los que apuntaban a su posible responsabilidad. Acorralado, Ángel Aguirre negará cualquier responsabilidad en los sucesos e irá soltando informaciones sobre la corrupción de Abarca, sus vínculos con el narcotráfico, y anuncia recompensa de 1 millón de pesos a quien proporcione datos que permitan la localización de los 43. Se aferrará a su cargo de más en más cuestionado (pero defendido a ultranza por la dirigencia nacional del PRD), ofrecerá convocar a una consulta popular sobre su mandato que no encontró eco en las organizaciones sociales que solicitaban su renuncia

y enjuiciamiento, y hasta el 23 de octubre —bajo la amenaza de desaparición de poderes— se resigna a pedir licencia a cambio de negociar su impunidad.

Hasta el martes 30 de septiembre no se pronuncia por primera vez el presidente Enrique Peña Nieto, que habla de “debilitamiento institucional” pero se niega a intervenir en el caso de Iguala, que considera responsabilidad del gobierno del estado. Al parecer, no quiere incomodar a su amigo el gobernador Aguirre, ni a la dirigencia del PRD, su aliado en el Pacto por México, con el que ha tratado de reconstituir el dominio del PRI y afianzar reformas estructurales, políticas estatales y la visión del país que asegure la restauración para el largo plazo de la “dictadura perfecta”. A pesar de las evidencias de involucramiento del crimen organizado —que debe combatirse por el gobierno federal—, de la intervención de fuerzas de seguridad oficiales en el asesinato y en la desaparición forzosa de 43 normalistas, lo que constituye un crimen de lesa humanidad, el gobierno de Peña Nieto solamente mandató a funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación para que coadyuvaran en las investigaciones del gobierno del estado de Guerrero, por demás cuestionado.

El desdén del presidente Peña Nieto hacia los estudiantes de una Normal Rural que todos los gobiernos han querido suprimir mostró una gran insensibilidad revestida de visos discriminatorios. Incurrió en omisión ante un caso grave de violación de los derechos humanos de una comunidad asediada y criminalizada, que precisamente erosionará en muy pocas semanas no solo su credibilidad, sino en general la legitimidad del conjunto de las instituciones estatales.

El 3 de octubre se filtra a los medios la intervención de dos cárteles del narcotráfico, Los Rojos y Guerreros Unidos, y que la procuraduría estatal configura el delito de desaparición forzada responsabilizando al presidente municipal José Luis Abarca y a un grupo de policías que habrían llevado a cabo, junto con delincuentes, la privación ilegal de la libertad de los 43. Empiezan a hacerse públicas las historias de vinculación con el narco por parte de funcionarios municipales, aunque el gobierno nacional va a tardar en dar a conocer el vínculo de José Luis Abarca con el cártel de Beltrán Leyva, del que se separaron los de Guerreros Unidos, y que conocía bien el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Días después el Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, señala oficialmente como los autores intelectuales de la desaparición a Abarca, a su esposa y a Felipe Flores, quien además de jefe de la policía resulta operador de Guerreros Unidos conocido como El Gil, cártel que recibía entre 2 o 3 millones de pesos mensuales por parte de Abarca.

Tal vez aprovechando la cascada de informaciones —que ya no se detendrá— sobre complicidades que de antemano sabía, sin haber actuado de ninguna manera, la PGR decidió atraer el caso de Iguala apenas el sábado 4 por la noche.

“Hasta el martes 30 de septiembre no se pronuncia por primera vez el presidente Enrique Peña Nieto”

De esta forma, muy tardíamente, casi diez días después del ataque policíaco a los estudiantes y la desaparición forzada de 43 normalistas, el gobierno de Peña Nieto asume la gravedad del caso, este se conduce de los sucesos “indignantes, dolorosos e inaceptables”, involucra al llamado “Gabinete de Seguridad”, y envía la nueva fuerza de élite recién creada, la Gendarmería, para rea-

lizar las tareas de seguridad pública. Los policías municipales de Iguala son desarmados y trasladados a la sexta región militar en Mezaquiahua, Tlaxcala, para su evaluación y capacitación. Luego ocuparán 17 municipios para realizar las mismas tareas, incluyendo uno del estado de México, Ixtapan de la Sal, también gobernado por el PRD. La PGR informa el 9 de octubre que investiga a la esposa de Abarca, entonces ya frustrada candidata a la presidencia municipal de Iguala y a consejera nacional del PRD, pues las autoridades caen en la cuenta de que toda su familia (padre, madre y hermanos) forman parte del crimen organizado, así que a la mejor... Jesús Murillo Karam, procurador de la PGR, y Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, se vuelven responsables de las investigaciones, “obligados a movilizar todo el aparato de investigación del Estado”, “toda la fuerza del Estado” para encontrar a los responsables de la desaparición. Se encargan de atender y negociar con los familiares de los desaparecidos y los normalistas.

Al fin “toda la fuerza del Estado”, como gustan decir los gobernantes, se pone en movimiento en la búsqueda e investigación de los normalistas desaparecidos, se irán descubriendo fosas clandestinas repletas de cadáveres jamás extrañados, buscados ni tampoco ahora identificados, lo cual de por sí resulta inverosímil y pone en evidencia la incompetencia o las complicidades del Ejército y los aparatos de inteligencia del Estado. De hecho, desde inicios de octubre habían comenzado a “descubrirse” las primeras fosas clandestinas, encontradas supuestamente por declaraciones de varios de los detenidos, policías lo mismo que miembros de la delincuencia organizada, aunque no se puede dejar de lado que presionó la intervención y movilización de 550 guardias comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) que salieron a rastrear a los estudiantes por toda la región de Iguala. A mediados de octubre la PGR realiza un primer balance de su intervención: 300 agentes federales participan en la búsqueda de los estudiantes; 46 detenidos, de ellos 22 policías de Iguala, 14 de Cocula y 10 civiles de Guerrero Unidos. Detenidos los autores materiales de la desaparición faltan los autores intelectuales; anuncia la PGR que prepara orden de aprehensión contra José Luis Abarca y el jefe de la policía municipal por delincuencia organizada; a la esposa se le investiga apenas y ninguno de los cuerpos encontrados hasta el momento en fosas es de normalistas.

Como contrapunto, el sacerdote Alejandro Solalinde, reconocido defensor de los migrantes centroamericanos, director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, informa que se enteró que los normalistas fueron asesinados y quemados.

Los motivos

Debe quedar claro que el factor catalizador del proceso contradictorio y conflictivo que se va ir armando a consecuencia de la asesina emboscada policíaca contra los estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición forzada de 43 de ellos, fue la respuesta de los propios normalistas, de los padres de asesinados y desaparecidos, de las organizaciones sociales y de derechos humanos que se movilizaron bajo la consigna “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, que ha simbolizado la larga lucha contra la desaparición forzada en México, que no ha dejado de producirse contra muchos opositores al régimen autoritario desde la guerra sucia con la que se prosiguió la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco en 1968.

En efecto, la exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas y del enjuiciamiento de los responsables materiales e intelectuales de los crímenes no se hizo esperar, y del horror y del asombro que provocó la noche del terror se pasó a la indignación y la rabia. Manifestaciones, mítines, tomas (y hasta quemadas) de ayuntamientos y oficinas públicas comienzan a realizarse en las principales ciudades de Guerrero, reuniendo a diversas organizaciones sociales del estado. El primero de octubre, con una magna movilización en Chilpancingo, capital del estado, los normalistas convocan al apoyo a todo el país. El 2 de octubre en la Ciudad de México, la manifestación conmemorativa del movimiento del 68 y de la masacre de Tlatelolco se realiza bajo el signo de Ayotzinapa, que en lo sucesivo se identifica también con la agresión estatal de Iguala. Estallan en diversas instituciones de enseñanza media y superior paros solidarios y se plantea una movilización nacional para el 8 de octubre. De las movilizaciones espontáneas que brotan en diversos lugares por el hartazgo de la violencia y la impunidad de la clase política y el crimen organizado (cuya amalgama se confirma de más en más por múltiples vías), se va pasando a la coordinación, a la organización y a la planeación de la lucha, vinculando resistencias sociales lo mismo que voces de todos los tonos y medios que claman por la justicia y la aparición con vida de los estudiantes normalistas desaparecidos.

Diversos organismos de derechos humanos denuncian que podría haberse evitado el crimen de Iguala si las distintas instancias judiciales hubieran tomado en serio las denuncias contra Abarca respecto al asesinato de varios activistas sociales, miembros incluso de su propio partido, y las evidencias de la corrupción de la clase política de todos los partidos y sus vínculos ostentosos con los distintos cárteles del crimen organizado. Como escribió Abel Barrera (2014): “Lo hemos dicho hasta el cansancio: en Guerrero, la línea entre la

delincuencia organizada y amplias franjas de los gobiernos es indistinguible. No se sabe dónde comienza uno, dónde termina el otro, quién infiltra a cuál”. De esta forma, se empezó a generalizar la denuncia por omisión de los responsables de la procuración de la justicia, de los gobiernos de los que dependen (estatal y federal), pero asimismo de los partidos políticos que se han desdibujado y descompuesto en la puja por el poder y el dinero, del que disponen a manos llenas, sea público o proveniente de los bajos fondos criminales. Los ataques de los policías, los seis asesinatos, los numerosos heridos y la desaparición forzosa de los 43 normalistas fueron apareciendo ante mucha gente de todos los medios sociales como producto de la ancestral impunidad en la que descansan los políticos, los funcionarios, los empresarios formales y los empresarios informales, incluidos aquí los miembros del crimen organizado. Una corrupción social generalizada desarrollada durante décadas como cultura del poder autoritario y como condición de una economía en extremo desigual, un régimen autoritario sostenido por una oligarquía estatal producto de las reformas electorales acarreadas por la crisis del Estado y un orden social extremadamente injusto que descansa en la explotación, el despojo y la exclusión de la inmensa mayoría de la sociedad, también con derechos restringidos, bajo sospecha, son la condición y la base de la prepotencia, del abuso de poder, de la impunidad que puede explicar la decisión de asesinar y desaparecer a hipotéticos aguafiestas.

Por todo ello nadie, fuera de ciertos círculos de beneficiados por el poder, niega que se trata de crímenes de Estado, tanto los asesinatos a mansalva de personas inocentes por parte de agentes estatales (en este caso la policía municipal bajo el mando del titular de una instancia constitucional de gobierno, el Municipio), como la no atención de civiles en peligro en que incurrieron las policías federal y estatal y el Ejército, como muy especialmente la desaparición forzosa de 43 estudiantes normalistas por policías municipales ayudados por sicarios, lo que es claramente un crimen de lesa humanidad.

Si resulta absurdo, banal y frívolo el posible *móvil* de la acción punitiva que ordenó un funcionario público en activo, los *motivos* de la respuesta social y la marejada inesperada que no deja de desbordarse en el país y en muchos lugares del planeta, tienen que ver con lo fundamental de la vida humana: la dignidad, la rabia ante la injusticia y el abuso de poder desmesurado. El *hartazgo*, como se ha dicho.

Las lógicas confrontadas

En este proceso hay dos lógicas que se superponen y contradicen. La primera de estudiantes, familiares, organizaciones de derechos humanos y en general todos los solidarios, organizados o no, sensibilizados por la atrocidad de la violencia y que exigen la aparición con vida de los 43 normalistas y castigo a los culpables, para lo cual van escalando y organizando un amplio proceso de

movilización de sectores sociales, a los que se van sumando de forma imprevista toda suerte de expresiones individuales o colectivas, iniciativas imaginativas de denuncia, que precisamente fueron levantando un oleaje de protesta que no ha cesado de crecer. Se unen no solo por la solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa, sino igualmente por el rechazo al poder y sus ocupantes, para quienes manifiestan una desconfianza que se confirma y refuerza día a día por el comportamiento errático, la incompetencia y las complicidades que traban evidentemente o condicionan la estrategia puesta en práctica por el gobierno de Peña Nieto. El desasosiego y el temor, infundidos por la larga guerra iniciada el sexenio pasado y que todavía prosigue, se convirtieron en resistencia, denuncia, crítica en busca de la justicia y la democracia que no llegan. Es una lógica de movilización, no solamente de lucha contra la violencia envolvente, sino que es también una búsqueda de la verdad, de la justicia y la democracia, libres de la corrupción que genera la impunidad y reproduce la violencia. Todo parece indicar que se trata de un movimiento de largo aliento, si bien con ritmos y perspectivas inciertos.

Por otra parte, la lógica del gobierno del presidente Peña Nieto está dictada por el “control de daños”, es la lógica del poder que se reproduce y garantiza a sí mismo, que procura conservar el orden despolitizando, asegurando la resignación y sometimiento de los excluidos mediante los medios de paga que difunden un modo de vida engañoso y sus programas asistenciales para las posibles clientelas de los partidos, de la base social del Estado. Una lógica excluyente que criminaliza y proscribire a inconformes, disidentes y rebeldes, como los estudiantes y maestros de Guerrero, que desprecia a los otros que no comparten el modo de vida que procuran. La lógica del poder descansa en la negociación de los distintos fragmentos de una clase política que se ha vuelto única, incolora, indiferenciada, pero que continúa agrupada en fracciones, en mafias, que reciben el nombre de partidos, desmesuradamente financiados y potenciados por los fondos públicos. Una lógica, pues, que en el fondo descansa en complicidades complejas y entrecruzadas de una clase política ampliada, de una oligarquía de Estado, que disputa cargos, espacios y recursos bajo una estrategia de fondo que los hace converger a todos en la defensa del orden social y político que los beneficia y les permite aspirar a ser acogidos por la oligarquía financiera que realmente controla todo. Tienen por supuesto contradicciones e intereses que los hacen “competir” en todos los niveles y espacios, en todos los mercados, formales o informales, legales o ilegales, incluso por medio de la violencia, como resulta evidente. Pero es justamente la esencia contradictoria de la lógica del poder.

Por esta lógica que rige al poder es que el gobierno de Peña Nieto dejó hacer a las fuerzas locales en Guerrero, dejando que sus aliados solucionaran sus líos. Omiso, negligente y despreciativo, solamente cuando el clamor de exigencia crece, se generaliza a prácticamente todos los medios y núcleos

“La respuesta de los propios normalistas, de los padres de asesinados y desaparecidos, de las organizaciones sociales y de derechos humanos que se movilizaron bajo la consigna ‘¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!’”

sociales, intelectuales, religiosos, etcétera y repercute por todas partes reproduciendo el clamor a nivel internacional, lo mismo en la sociedad que entre representantes de gobiernos como el de Estados Unidos e instituciones como la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas —acicateados en gran medida por los organismos internacionales de derechos humanos—, solo entonces el gobierno mexicano interviene con el claro propósito de atajar el impredecible y autónomo movimiento disruptivo, tratando a la vez de aprovechar la crisis en la perspectiva de un cercano proceso electoral y la posibilidad de reagrupar y afianzar el poder de su partido, por

decirlo así. La estrategia es recuperar la iniciativa, acercarse a los padres de los desaparecidos y a los normalistas que encabezan el movimiento, ofreciendo “toda la fuerza del Estado” en la búsqueda y las investigaciones que por lo demás resultan erráticas y poco creíbles. Limitar los daños alargando el conflicto con el propósito de que los interlocutores vayan agarrando confianza, se sientan atendidos y hasta protegidos y así la protesta se agote y disuelva, como siempre sucede. Solo quedarían entonces las memorias enturbiadas de vidas desgarradas o destruidas, cifras añadidas a las decenas de miles de desaparecidos y muertos en estos años de pretendida guerra inacabada contra el crimen organizado. Si bien tardíamente, diez días después de los crímenes, el gobierno reconoce incluso la desaparición forzada de los estudiantes, pero en la práctica en ninguna de las consignaciones de las decenas de detenidos aparece la desaparición forzada como acusación. Se cansan de buscar fosas clandestinas que brotan dondequiera, sembradas de cadáveres jamás extrañados, buscados ni identificados, pero no exploran la ruta de encontrar a los estudiantes con vida, lo que solo hacen con reticencia bajo la presión de los padres y el movimiento.

La lógica de la movilización, sin embargo, no logra ser detenida y en cambio no deja de crecer tumultuosa y turbulenta, brotando por todas partes, en los sectores más insospechados. A las manifestaciones locales en Guerrero se añaden las primeras movilizaciones nacionales los días 8 y 22 de octubre, cuando en más de 20 estados de la República se realizan acciones de protesta, siendo entonces el principal contingente el de San Cristóbal de las Casas, integrado por más de 20 mil miembros de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes llegaron procedentes de todas sus comunidades. A partir de ese momento las manifestaciones rompen con inercias y reticencias provocadas por los sucesivos gobiernos del PRD en el Distrito Federal que procuraron desmovilizar y criminalizar a una ciudadanía atrapada entre las redes clientelares de los programas asistencialistas o la represión

policiaca y la intolerancia de la pretendida “izquierda moderna”. Se quedan cortas las previsiones más optimistas, por ejemplo el miércoles 29 de octubre cuando cerca de 90 mil personas se manifestaron en la larga tarde-noche en la ciudad de México y lo mismo el 5 de noviembre con alrededor de 120 mil participantes que llegaron al Zócalo. Los estudiantes del sector de la educación media y superior —muchos en recurrentes paros solidarios— se convierten en columna vertebral de las amplias y diversas movilizaciones populares, anudando lazos organizativos a través de una coordinación nacional que comienza a discutir la estrategia duradera del movimiento. Las organizaciones ciudadanas no dejan de sumarse y jugar su papel en la articulación y difusión de la protesta. Las jornadas de protesta alcanzan en efecto un nivel nacional, teniendo además eco en numerosas ciudades del mundo, donde se reprodujeron las movilizaciones con la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos y la consignación y enjuiciamiento de todos los responsables.

La lógica del poder, en consecuencia, subestimó la lógica de la movilización y fracasó en sus propósitos de control de daños. En realidad el gobierno de Enrique Peña Nieto se encuentra acorralado, asediado, nacional e internacionalmente. Su incompetencia real o su negligencia suscitada probablemente por compromisos y complicidades, su ausencia de sensibilidad dada su prepotencia y desinterés en los normalistas desaparecidos, no le permitieron percibir el cambio del estado de ánimo de innumerables núcleos sociales y no solo de los jóvenes. La ausencia de resultados efectivos acentuó la indignación y la rabia, la denuncia, de más en más amplia, de su incapacidad. El 24 de octubre, los padres y los estudiantes que mantenían el contacto con la comisión gubernamental decidieron romper el diálogo y los tratos con la PGR, por la ausencia de resultados y ante el anuncio de esta última de que una línea de investigación apuntaba a los pretendidos vínculos de los normalistas con la delincuencia organizada, lo que fue considerado un intento de criminalización de las víctimas y de la propia Escuela Normal, siempre asediada y despreciada por todas las fuerzas oficiales. Exigieron una entrevista directa con el presidente, la que se realizó el día 29. Peña se compromete a respetar los derechos, la honra, la reputación de los estudiantes desaparecidos, desechando evidentemente la línea de criminalización, garantizando el debido proceso, la no impunidad, la atención a las víctimas, la reparación del daño y el apoyo al despreciado sistema de Normales Rurales, al tiempo que promete un convenio de asistencia técnica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitado por los padres.

El encuentro ameritó un mensaje nacional televisado del presidente y la expresión de insatisfacción e incredulidad de los padres de los desaparecidos, de los abogados y los estudiantes que participaron. Ante la exigencia de que ya no se buscaran cadáveres sino estudiantes con vida, se rehizo el Plan de búsqueda, se creó la comisión mixta de seguimiento e información integrada por

personal investigador de la PGR y de la Secretaría de Gobernación. Por último, ofreció facilidades a los peritos argentinos, los únicos en quienes los familiares confían, para la búsqueda e identificación de los restos encontrados.

Pero no duró mucho la cordialidad. Las divisiones entre las distintas fracciones de la clase política se aceleraron e incluso voceros de los sectores privilegiados exigieron apurar una solución a la crisis política y social que corría el riesgo de afectar la recuperación económica. La estrategia desmovilizadora del gobierno había fracasado y en cambio acicateó más todavía la resistencia, el rechazo, las denuncias de la incompetencia del Estado; el descrédito institucional se generalizó entre las redes sociales, incluso los medios de paga alarmados por la “ingobernabilidad”. Como planteó el llamado Movimiento 43x43 al llegar a la Plaza de la Constitución del DF: “el Estado actual ya no sirve a la sociedad” ante la situación de emergencia nacional por la inseguridad que se vive en México.

El gobierno, entonces, parece cambiar de táctica o estrategia, ya no alargando indefinidamente las investigaciones a fin de desmovilizar por cansancio y ausencia de resultados, sino tratando de encontrar en forma apresurada un desenlace que le permita echar cerrojo al caso. Una suerte de fuga hacia adelante es lo que el gobierno realiza, poniendo en práctica ahora una estrategia del shock dirigida a desmoralizar y aterrar no solamente a familiares y núcleos sociales movilizados, sino al conjunto de la población, de la sociedad, recuperando la *política del miedo* con la que Felipe Calderón Hinojosa pretendió paralizar y gobernar al país.

La fuga hacia adelante

El día de una de las más grandes jornadas de movilización nacional e internacional, con más de 80 instituciones educativas en paro por la presentación con vida de los 43 normalistas, el 5 noviembre, caen los Abarca, en lo que será considerado por muchos como un montaje de la PGR, luego se consigna al fin al expresidente municipal perredista por los denunciados e impunes homicidios de tres integrantes de la Unión Popular de Guerrero, además de su vinculación con Guerreros Unidos. Nada de la desaparición forzada de los 43. A la mujer la mantienen en arraigo a fin de investigarla. El viernes 7 de noviembre el Procurador General de la República, Murillo Karam, realiza una conferencia de prensa transmitida en vivo y en directo (luego martillada hasta el cansancio) por todos los medios de paga, donde “informa” que, por testimonios de tres sicarios de Guerreros Unidos, se entera que los 43 estudiantes normalistas desaparecidos fueron ejecutados, calcinados hasta la pulverización en una gran pira incendiaria en el basurero municipal de Cocula, la que se mantuvo por más de diez horas y luego, ya enfriados los restos, arrojados a un río no muy cercano. Un auténtico *show* del horror, con pretendidos testimonios videograbados y relatos detallados sobre el supuesto traslado, asesinato e incineración de los

estudiantes, dirigido a impactar y aterrar a todo mundo, realmente sin precedentes ni siquiera en los peores momentos de la guerra sucia del siglo pasado. Al final de cuentas, el gobierno retomó la noticia que el sacerdote Solalinde había mencionado casi un mes antes, sin que encontrarán anteriormente rastros o restos de semejante incendio en el lugar ahora redescubierto y maquillado como el lugar del crimen. Murillo Karam concluyó su penosa declaración previniendo las reacciones de los familiares y del movimiento: “están muertos, pero para el gobierno federal legalmente siguen desaparecidos”.

No tiene caso reseñar el rechazo casi generalizado a las declaraciones de la PGR, los absurdos que revela que no hacen sino evidenciar el apremio y la falta de imaginación, la incompetencia e incapacidad del gobierno para realizar investigaciones efectivas y perseguir delitos que siempre quedan en la impunidad. Los padres y estudiantes normalistas no solamente rechazaron y condenaron la salida que pretende imponer el gobierno, sino reafirmaron su exigencia y su lucha por la presentación con vida de todos los desaparecidos, reestimulando de este modo el proceso de movilización que no dejará de proseguir hasta encontrarlos realmente. Nuevas acciones comenzaron a organizar para darle continuidad y fuerza a una lucha que no tiene por qué detenerse, como las tres caravanas de padres que a partir del 14 de noviembre salieron hacia el norte y el sur del país a recorrer varios estados, así como al resto de Guerrero, las cuales convergirán el día 20, aniversario del estallido de la Revolución mexicana, en el Zócalo de la Ciudad de México.

La degradación y la crisis

Ayotzinapa se ha convertido en pocas semanas en el revelador de la crisis de instituciones estatales carentes de credibilidad, de la descomposición política y social de un régimen parchado ajeno, por encima y contra la sociedad. La clase política, la oligarquía del dinero, la mafia criminal se entreveran mediante un sinnúmero de vasos comunicantes, negocios y complicidades asentados en una suerte de pacto de impunidad que rige en México desde siempre, si bien con adecuaciones conforme a actores y condiciones cambiantes. Por más que los distintos gobiernos y actores políticos estatales se empeñan en hacer de Ayotzinapa, del terror de Iguala, un caso local, con actores locales y consecuencias locales, su alcance en realidad se volvió nacional y mundial, por su carácter de crimen de lesa humanidad. Por omisión o comisión, como se dice en la jerga jurídica de una legalidad inexistente en México, los tres niveles de gobierno, el Estado en su conjunto, comprendidos aquí el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, los congresos estatales y los partidos políticos legales, son todos responsables, copartícipes, cómplices del caso Ayotzinapa que se desborda a lo largo y lo ancho de la nación, donde se reproducen desde siempre las mismas prácticas criminales, la corrupción generalizada, la impunidad de los de arriba y la criminalización de todos los demás, excluidos, explotados, despojados,

“El miércoles 29 de octubre cerca de 90 mil personas se manifestaron en la larga tarde-noche en la ciudad de México y lo mismo el 5 de noviembre con alrededor de 120 mil participantes”

proscritos en su, nuestro, país, de nuevo colonizado y dominado por oligarquías voraces y sin escrúpulos.

El Pacto por México tramado por Enrique Peña Nieto, cuya representación y legitimidad institucional solo se lograron mediante elecciones ganadas con el tráfico de la pobreza y la compra del voto, los partidos de oposición devenidos como en los viejos tiempos partidos *peleles*, las reformas estructurales bajo la lógica del libre mercado a ultranza, no han dejado de preparar cambios de fondo en el país conducido a la supe-

ditación completa de los grandes capitales mundializados y las potencias imperiales promotoras del capitalismo devastador. Pero Ayotzinapa muestra la fragilidad de ese proceso manejado por una minoría carente de representación y legitimidad sociales. Solamente se representan a sí mismos y cuanto mucho a sus siempre cambiantes cientelas alimentadas con migajas de recursos públicos disfrazadas de programas sociales. Son una minoría ambiciosa y prepotente, sin más propósito que el control del país y su gestión mafiosa en su provecho. Han construido un régimen autoritario que se presume democrático, pero que solamente los involucra a ellos, que se consideran representantes de los demás sin serlo; la legalidad del país siempre ha sido a modo, sujeta a un orden jerárquico que sigue teniendo la cima en el presidente y sus raíces en los capitales que ahora también disputan directamente el poder político. Un régimen de semilegalidad que jamás devino Estado de derecho y por lo mismo sin reglas institucionales claras, sin justicia ni libertades plenas para todos los ciudadanos que nunca hemos logrado ser la mayoría en México.

Pero Ayotzinapa también simboliza y anuncia lo que algunos han llamado un *despertar* de la sociedad y que no es sino el hartazgo ante el abuso del poder, la violencia, la corrupción, la impunidad y todo aquello que fue formando una cultura política nacional perversa, clientelar y excluyente. Revela la decantación que de cualquier forma, a contracorriente, no han dejado de producir las múltiples, continuas y a veces recurrentes resistencias a la opresión, la discriminación, contra la explotación, el despojo y el abandono. Estudiantes, campesinos, pueblos indios, pero igualmente profesores, trabajadores que sobreviven al desastre de la precarización neoliberal, vecinos, amas de casa, pescadores, jóvenes, mujeres, intelectuales, migrantes..., de muy distintas maneras y en momentos a veces inesperados resisten, defienden su vida, su cultura, sus bienes comunes amenazados, sus reivindicaciones. Una larga resistencia, una verdadera *revuelta cotidiana* a veces soterrada, bajo cuerda, que no ha dejado de producirse en todos estos años de ofensiva del capitalismo

neoliberal, fue confluyendo bajo el signo de Ayotzinapa, por el terror y los crímenes de Estado a que fueron sujetos los normalistas que la representan, pero también por la resistencia, por la dignidad de la lucha que mostraron y no dejan de estimular a muchos más que en forma impredecible sumaron su rabia, su solidaridad y su inteligencia.

La imagen de salvador que los medios y oligarquías le fabricaron al presidente Peña Nieto por la audacia de sus convocatorias a sus supuestos rivales y por las reformas estructurales que con ellos fraguó a espaldas de la sociedad y del país, se derrumbó por las ondas de choque producidas por Ayotzinapa. La exigencia de su renuncia por incompetencia e irresponsabilidad se ha generalizado y al menos será difícil que pueda recuperar un mínimo de credibilidad entre una sociedad que lo repudia y tal vez tampoco entre los medios privilegiados que lo proyectaron y sostuvieron. Todos los partidos y la clase política han sufrido el desgaste a pesar de pretendidas divergencias, deslindes y comportamientos a modo durante el conflicto en curso. Pero el PRD en especial también se derrumbó, pues Ayotzinapa evidenció en forma brutal lo que ya era incuestionable: su abandono de los viejos principios y prácticas de izquierda, su anulación como partido ligado a los sectores sociales que le dieron vida y su transfiguración en un conjunto de fracciones-aparato, de bandas, de mafias agrupadas en torno a intereses y lealtades perversas, administrando un aparato electoral manejado como franquicia en busca de cargos y por la puja del reparto del botín de los dineros públicos. Poco a poco, ensimismado, autista, se alejó de la sociedad a la que solamente contempló como posibles clientelas reclutables mediante prácticas corruptas y clientelares. Los sectores sociales, los individuos o colectividades que le habían dado vida y proyección electoral luego de la insurrección civil de 1988, también abandonaron al PRD, decepcionados, sin esperanzas ya en poder incidir en legislaciones o gobiernos que pudieran favorecer a todos, y no solo a los de arriba.

El comportamiento de la dirección y del consejo nacional del PRD en la crisis suscitada por el ataque y la desaparición forzada de los normalistas por parte de uno de sus militantes notables, presidente municipal y futuro candidato a diputado, y de su esposa, candidata perredista en ciernes a sucederlo y consejera nacional perredista, puso en claro negligencias, complicidades y omisiones que no significaron sino un botón de muestra de la descomposición partidista. Lo mismo su defensa y arropamiento del gobernador de Guerrero, llevado al poder por el PRD, a pesar de haber sido un priista de toda la vida y exgobernador interino incluso públicamente responsabilizado del asesinato de decenas de perredistas. La caída de Aguirre solamente precipitó el hundimiento del PRD, cuyos dirigentes, incluso disidentes, no han dejado de sufrir la condena y el acoso por su quiebra moral y sus complicidades con los responsables de un crimen de Estado. No es la quiebra de la corriente hegemónica afin a los gobernantes en turno, sino el fracaso y descomposición de un proyecto que algún

tiempo se pretendió de izquierda. Sin duda, será sin embargo una muerte lenta, que pretende acelerar —también como control de daños— su fundador, Cuauhtémoc Cárdenas, que viene de solicitar la renuncia de la dirigencia nacional que apenas ha entrado en funciones luego de un proceso electoral característico de los modos y tiempos del viejo priismo/3.

Lo que sigue

Es difícil saber el rumbo que seguirán tanto el movimiento por los desaparecidos de Ayotzinapa como el propio gobierno aunado a la clase política en una crisis que no parece encontrar soluciones. Los padres y estudiantes que animan y encabezan el movimiento persistirán sin duda exigiendo la aparición con vida de los 43 y no parece amainar, sino todo lo contrario, la oleada de indignación por el montaje gubernamental cada vez más cuestionado y desmantelado por sus contradicciones, su carencia de sustento y de credibilidad. Las movilizaciones se endurecen y aparecen infiltraciones de provocadores que claramente buscan preparar las condiciones para una posible represión del gobierno que, hasta ahora, se ha contenido por haber sido acorralado y por encontrarse a la defensiva. Los medios de comunicación de paga olvidaron ya las motivaciones aceptables de las manifestaciones que se esmeraron en difundir algunas semanas insólitas y desatan en cambio, como siempre, una ofensiva criminalizadora que se dirige a desencantar a algunos manifestantes, desmontar la protesta y preparar igualmente la salida represiva, anunciada por lo demás por el presidente Peña Nieto apenas al regreso de su anhelado viaje a China.

La sociedad puede que comience a desmovilizarse, a ocuparse de otra cosa, a menguar efectivamente su solidaridad práctica, pero difícilmente será lo que era, sensibilizada y politizada por acontecimientos que cimbraron, conmovieron y movilizaron a muchos, incluso si no se movilaron de alguna manera. No es momento de balance ni de cambio de orientación del movimiento. ¿Que se vayan todos? El hartazgo y la crítica que acompañan la pérdida de confianza en las instituciones estatales y quienes las manejan, difícilmente avalarán una pretendida solución que busque la renuncia del presidente y su gobierno para, ahora sí, ganar en la elección que viniera y reproducir las mismas prácticas, las mismas políticas, que todos los partidos no han dejado de implementar y que seguirán haciéndolo. El proceso hacia un desenlace favorable del movimiento tal vez se ligue a la resolución de la crisis estatal que no cesa, pero solamente en la perspectiva de reconstruir el poder y la sociedad desde abajo, esto es, de construir alternativas de fondo al orden social capitalista y la especie de democracia oligárquica que prevalece.

El sábado 15 de noviembre la caravana de padres y alumnos de Ayotzinapa que recorrió el sur del país difundiendo y alentando su lucha por la aparición

3/ Cárdenas finalmente anunció su salida del PRD el 25 de noviembre de 2014 (N. del E.).

con vida de los 43 y la justicia llegó al Caracol de Oventik, donde fueron recibidos por la comandancia zapatista. Compartieron dolores y experiencias, la perspectiva de posibles abandonos y olvidos de muchos que han apoyado el movimiento. Pero también la necesidad de resistir, de persistir en la lucha incluso en condiciones adversas, de unir rebeldías, rabias, pero igualmente de construir desde abajo una alternativa de vida, de transformación real. La lucha apenas comienza y no será fácil.

¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!

Tlalpan, Ciudad de México, 18 de noviembre de 2014.

Arturo Anguiano es profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (México). Su libro más reciente es *El ocaso interminable. Política y sociedad en el México de los cambios rotos* (Era, México, 2010).

Bibliografía citada

Barrera, A. (2014) “Del 2 de octubre al 26 de septiembre”. *La Jornada*, 3/10/2014.

* *VIENTO SUR* ha optado por respetar en este texto las particularidades lingüísticas del español de México.